

**¿CONTAMINACIÓN EN EL RIO CALI? LA CIUDADANÍA RECUPERANDO EL
CONTROL DEL RIO CALI DESPUÉS DE LA MINERÍA ILEGAL (2011-2015)**

ADALBER CONDE LUCERO

**UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
SANTIAGO DE CALI
2018**

**¿CONTAMINACIÓN EN EL RIO CALI? LA CIUDADANÍA RECUPERANDO EL
CONTROL DEL RIO CALI DESPUÉS DE LA MINERÍA ILEGAL (2011-2015)**

ADALBER CONDE LUCERO

Trabajo de grado para optar por el título de Economista

**Director de tesis
FABIO ALBERTO ARIAS
Economista, PhD.**

**UNIVERSIDAD DEL VALLE
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
SANTIAGO DE CALI
2018**

¿CONTAMINACIÓN EN EL RIO CALI? LA CIUDADANÍA RECUPERANDO EL CONTROL DEL RIO CALI DESPUÉS DE LA MINERÍA ILEGAL (2011-2015)

Adalber Conde Lucero

Resumen

Este documento busca explicar la problemática socio-ambiental que ocasiona la contaminación con mercurio y cianuro sobre el río Cali, por parte de la minería ilegal ejercida en los Farallones de Cali, con lo cual se afectó la calidad del servicio de agua potable de la ciudad de Santiago de Cali. Haciendo uso de la Economía Política y de la Economía Política del Medio Ambiente se responden los siguientes interrogantes: ¿cómo la ciudadanía enfrentó el posible desabastecimiento de agua potable ocasionado por la contaminación que genera la minería ilegal?, ¿cuál fue el motivo por el cual la sociedad enfrentó la problemática socio-ambiental?, ¿cómo las autoridades ambientales intervinieron la problemática? Se pudo ver que la manera en que la sociedad abordó la problemática fue un proceso en cadena que se desató por las preocupaciones sobre salud pública más que por las del medio ambiente. Esto hizo que se presionara a las autoridades lo que aumentó la efectividad de las intervenciones por parte de las autoridades ambientales, debido a diversos factores, la movilización ciudadana, las denuncias, etc.

Palabras Clave: Problemática socio-ambiental, Río Cali, Minería ilegal, Farallones de Cali, Economía Política.

Clasificación JEL: A12, Q20, Q25, Q57, Q59.

Introducción

Este trabajo documenta el esfuerzo de la ciudadanía aledaña al Río Cali en el Parque Nacional Natural los Farallones de Cali, para recuperar el control del río a partir de las actividades de minería ilegal que se realizaban en el sector. A partir del descubrimiento de minas ilegales, se encontraron altos niveles de mercurio que contaminaban el agua que iba a la bocatoma del río, luego se encontró que una de las quebradas subsidiarias al río fue desviada y por ende el caudal del río se veía disminuido lo que afectaba no solo la calidad, sino también la cantidad del agua que llegaba a la bocatoma de San Antonio. Para ello se hizo un análisis documental y cualitativo en el que se revisan diferentes fuentes para analizar las razones por las cuales ésta problemática se configuró en un conflicto ambiental, y como la ciudadanía intentó resolverlo.

En el Parque Nacional Natural los Farallones de Cali se presentan actividades de minería ilegal. Las cuales utilizan sustancias como el mercurio y el cianuro para poder extraer el oro de la roca, estas sustancias son perjudiciales para la salud del ser humano y para el medio ambiente, luego de ser usadas en el proceso de extracción del oro, son vertidas a las quebradas que nacen en los Farallones; algunas de estas quebradas son afluentes del río Cali, como lo es la quebrada del Socorro. Dado que el río Cali es usado por el Acueducto San Antonio para abastecer de agua potable a aproximadamente medio millón de caleños, existe una incertidumbre de si la minería ilegal en los Farallones podría llegar a afectar la salud de las personas que se abastecen de agua potable por medio del Acueducto San Antonio. Lo que se buscó fue dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo hace la sociedad para enfrentar el anterior problema?

Para poder dar respuesta a la pregunta de investigación, se hizo necesario esbozar el problema ambiental, por ende, se realizó una breve descripción del PNN Farallones de Cali. Esta es una reserva natural que ocupa parte del territorio de ciertos municipios, en donde habita un sin número de especies de mamíferos, aves y plantas, también en esta reserva natural habitan diferentes grupos humanos como lo son los campesinos, afrocolombianos e indígenas.

Para terminar de esbozar la problemática, se hizo un análisis de toda la información relevante que se recopiló. Esta información fue presentada en orden cronológico, y para analizar dicha información se usaron un conjunto de teorías, y como metodología se usó el análisis cualitativo, las teorías usadas fueron la Economía Política, la “Nueva” Economía Política, la Economía Política del Medio Ambiente, la Ecología Política; y también se recurrieron a diferentes autores que tratasen el tema de la Incertidumbre.

Al analizar la información sobre el problema socio-ambiental se pudieron observar ciertas características particulares que este presenta. Una de ellas tiene que ver con la participación de la ciudadanía, ya que ésta, al ejercer presión sobre entidades sancionatorias hizo que se impusieran sanciones que obligarán a las autoridades competentes a intervenir la problemática. Otro de los aspectos a resaltar fue el importante papel que jugaron los medios de comunicación, ya que, por medio de sus noticias causaron cierta preocupación que logró aumentar la atención de la ciudadanía hacia la problemática. Pero no solo fueron los medios

de comunicación los que le dieron razones a la ciudadanía para que se preocupara, ya que la autoridad ambiental por medio de los resultados de estudios realizados sobre la contaminación del río Cali legitimó sus preocupaciones.

1. Minería Ilegal En Los Farallones De Cali

Para describir de manera completa la problemática, se realizará una descripción del Parque Nacional Natural los Farallones de Cali. Se mencionará su ubicación y extensión, la riqueza en fauna y flora que en él habita, también se hará referencia a la gran variedad climática que éste presenta, se traerá a colación los diversos grupos humanos que habitan los Farallones, por lo que en la sección **1.1 Los Farallones**, se expondrá la importancia hídrica que tienen los Farallones para la Ciudad Santiago de Cali. En la siguiente sección **1.2 Problemas**, se aludirá a la contaminación con mercurio y cianuro causada por actividades de minería ilegal presente en los Farallones, y como dicha contaminación puede afectar el suministro de agua potable. En la sección **1.3 Investigación**, se indicará que con el presente trabajo se buscó responder a una pregunta exploratoria por medio de ciertas herramientas. La última sección **1.4 Características Particulares**, establecerá la existencia de ciertas peculiaridades encontradas en la forma en que la sociedad enfrentó la problemática.

1.1 Los Farallones

El Parque Nacional Natural los Farallones de Cali son las formaciones rocosas más jóvenes de la cordillera occidental de los Andes. Su relieve es escarpado y quebrado, contando con elevaciones que varían entre los 200 y 4100 m.s.n.m (Sesana, 2007). Abarca los municipios de Cali, Jamundí, Dagua y Buenaventura, convirtiéndose así en el área protegida más grande del Valle del Cauca (Parques Nacionales, 2017).

Dentro del PNN Farallones de Cali existe una gran diversidad de fauna, desde pequeños murciélagos (80 especies) hasta el oso andino. Cabe resaltar la existencia de cinco especies de primates como el mico maicero, mono aullador colorado y marimonda; ocho especies de marsupiales, osos hormigueros, perezosos y ardillas (Parques Nacionales, 2017). Aunque el parque cuenta con una gran variedad de mamíferos, son las aves su gran tesoro, pues en él habitan aproximadamente 600 especies de aves, algunas de ellas son el barranquero, águila solitaria, gallito de roca, el vencejo cuelliblanco, la traupida, y la paloma (Castaño, 1998).

En cuanto a la flora éste presenta una gran diversidad. Pues en él existe una gran profusión de lianas, bejucos leñosos y epífitas, también se protegen especies como el roble común y el roble negro, los cuales hacen parte de las 108 especies que se protegen dado su nivel de amenaza a nivel nacional. Algunas especies características que se pueden encontrar son: el gualanday, el cacao silvestre, el yarumo y los helechos arborescentes (Parques Nacionales, 2017).

También presenta una gran variedad climática, pues en el PNN Farallones de Cali se presentan cuatro formaciones vegetales naturales. El páramo (superior a 3.500 msnm), bosque altoandino húmedo (2.000 – 3.500 msnm), bosque subandino húmedo (1.200 – 2.000 msnm) y selva húmeda tropical (entre 200 y 1.200 msnm) (Parques Nacionales, 2017). En la selva húmeda tropical, se desarrolla una gran diversidad florística, estudios han encontrado unas 300 especies de plantas superiores por hectárea. Las palmas, ficus, cauchos, cargueros,

ollas de mico, sapotes y caimitos, son las familias de árboles más comunes que se puedan encontrar (Garcés y de la Zerda, 1994).

En el bosque sub-andino húmedo a 1200 y 2000 m.s.n.m existe una menor cantidad de bejucos, lianas y palmas, en contraste predominan el roble y el azuceno. A una altura de 2000 a 3500 m.s.n.m se desarrolla el bosque alto andino húmedo, en donde proliferan los encenillos, las tunas y los chusques (Sesana y Hurtado, 2007). Por último, a una altura de 3600 m, comienza el páramo, en donde su mayor aspecto a resaltar es la ausencia de frailejones, en esta zona existe la “violeta silvestre” la cual posee corolas rosadas (Castaño, 1998).

El PNN Farallones de Cali también está habitado por diversos grupos humanos, como lo son los indígenas, afrocolombianos y las poblaciones rurales. Dentro de la población indígena se encuentra la etnia Páez los cuales se encuentran ubicados en el sector Pacífico y Andino del Parque, los Nasa ubicados en los sectores Alto Naya y Alto Anchicayá. Por su parte las comunidades afrocolombianas habitan la vertiente pacífica del parque, asentadas a lo largo de los ríos Naya, Cajambre, Yurumanguí, Raposo y Anchicayá (Personería Municipal de Santiago de Cali, 2015). Por último, las poblaciones rurales se dividen en tres clases, los campesinos, que vienen de regiones como Nariño, Cauca y Putumayo, estas personas tienen una fuerte identidad con el territorio, los colonos, que viven en la zona urbana y usan el parque como sitio de descanso, y la población flotante que son aquellas personas que visitan el parque pero no tienen una relación de identidad con él (Parques Nacionales, 2017).

Es preciso resaltar que el PNN Farallones de Cali es de suma importancia para el Valle del Cauca, debido a su riqueza hidrográfica. Pues éste cuenta con un caudal en las vertientes del océano Pacífico y del río Cauca, con las cuales surte de agua a los principales centros poblados y acueductos rurales de los municipios de Cali, Jamundí, Dagua y Buenaventura, también alimenta dos represas, los embalses del Alto y Bajo Anchicayá, que generan energía eléctrica para el país. Los ríos más emblemáticos son los ríos Cali, Pance, Claro y Jamundí, y en la región del Pacífico los ríos Anchicayá, Raposo, Cajambre, Yurumanguí y Naya. Es claro resaltar, que el río Cali es de gran importancia, pues el abastece alrededor de 600.000 personas de la población de Cali, a través del Acueducto de San Antonio y algunos acueductos rurales (Parques Nacionales, 2017).

1.2 Problemas

Es debido a esta importancia hídrica, que lo que acontece en el PNN Farallones de Cali es de relevancia para toda la ciudadanía. Lastimosamente esta relevancia no es suficiente para que en el parque no se presenten diferentes problemáticas, una de ellas es la minería ilegal que se ejerce en el sector las Minas del Socorro o Alto del Buey, éste se encuentra ubicado en los corregimientos de Pichindé y La Leonera, en la parte alta de la cuenca del Río Cali, en donde desde el año 2007 funcionarios del PNN Farallones de Cali detectaron actividades de minería ilegal. La problemática de la minería ilegal se ha venido agravando debido a la llegada de personas no nativas a la zona, personas que provienen principalmente de Antioquía y de otros lugares como el Cauca, Nariño, Quindío y Risaralda. Esta emigración altera el orden público en todo el corregimiento de los Andes y de la zona cercana a la vereda Peñas Blancas, debido a que esta población flotante agrava la ocupación ilegal presente en el Parque, pues al recibir

recursos provenientes de la minería ilegal, edifican y mejoran viviendas sin autorización (Personería Municipal Santiago de Cali, 2015).

Pero uno de los peligros de la minería ilegal, es que para extraer el oro de la roca, ésta hace uso de sustancias como el cianuro y el mercurio. Este último es un metal pesado altamente nocivo para la salud del ser humano, la exposición al mercurio (incluso a pequeñas cantidades) puede causar graves problemas de salud y es peligrosa para el desarrollo intrauterino, y en las primeras etapas de vida, el mercurio puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel, los pulmones, riñones y ojos, el mercurio es uno de los diez productos o grupos de productos químicos que plantean especiales problemas de salud pública (Organización Mundial de la Salud, Marzo 2017).

Estas dos sustancias luego de ser usadas son vertidas a los afluentes y a las aguas de los ríos que nacen en los Farallones. Entre ellos cabe resaltar el río Cali, el cual es usado por el Acueducto San Antonio para proveer de agua potable a aproximadamente 600.000 personas, por lo cual los efectos de la contaminación de la minería ilegal podrían llegar a afectar a este núcleo poblacional (Personería Municipal Santiago de Cali, 2015).

Frente a esta problemática la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, realizó monitoreos encontrando presencia de mercurio y cianuro. Estos monitoreos fueron realizados en los años 2012 y 2013 en el sector Las Minas del Socorro o alto del Buey. Luego se prosiguió realizando monitoreos a lo largo de la cuenca del Río Cali y en la Bocatoma del Acueducto San Antonio, y se encontró presencia de mercurio que superaron los límites permitidos. A este respecto EMCALI en el año 2014 realizó monitoreos al agua cruda que se usa para los procesos de potabilización, y encontró presencia de metales pesados, pero en niveles que no excedieron la norma (Personería Municipal Santiago de Cali, 2015).

La minería ilegal se convirtió en fuente de financiamiento para ciertos actores armados. El frente 30 de las FARC usó la zona occidental del Parque como corredor para transportar sustancias alucinógenas e insumos para la minería ilegal. Frente a esto, el ejército realizó operaciones en contra de la minería ilegal, haciendo presencia en El Socorro, Peñas Blancas y Pichindé, pero debido a que no existían puestos militares de control permanente y las minas se desarrollan de manera esporádica, las operaciones militares resultaron insuficientes (Personería Municipal Santiago de Cali, 2015).

1.3 Investigación

En los anteriores párrafos se puede observar una problemática socio-ambiental. En donde las sustancias como el mercurio y el cianuro arrojados a los afluentes del río Cali por la minería ilegal realizada en los Farallones de Cali, pueden afectar de manera negativa la salud de aproximadamente 600.000 personas, debido a que el Acueducto San Antonio utiliza el río Cali para abastecer de agua potable a esas personas. Dado el anterior problema socio-ambiental se buscó dar respuesta a ¿Cómo la sociedad en su conjunto enfrenta el problema de la minería ilegal en el río Cali?

Para responder a esta pregunta, se recopiló toda la información que se consideró relevante, proveniente de distintas fuentes como la prensa, documentales e informes de la CVC. Se presentó la información en orden cronológico y se analizó dicha información por medio de teorías y del análisis cualitativo, aplicado por medio de 9 entrevistas realizadas a las personas

que desempeñaron un papel relevante en la evolución de la problemática. Se analizó dicha información en un tramo cronológico que comprende el 12 de abril del 2011 hasta el 15 de abril del 2016, con lo cual se llegaron a una serie de conclusiones.

Las personas entrevistadas fueron las siguientes:

- Hugo Mario Cárdenas López / Editor unidad investigativa del diario el país
- Jaime Celis / Jefe de área protegida código 2025 grado 2, Director del PNN Farallones de Cali
- Juan Manuel Pulido / Miembro de la junta directiva de Emcali
- Lilia Estela Hincapié / Actual procuradora agraria y ambiental
- Lucero Acevedo / Profesional operativo planta tratamiento rio Cali
- Luis Alfonso / Actual director del DAGMA
- Luisa María Baena / Actual directora laboratorio ambiental de la CVC
- Nelver Castro / Profesional del área de Participación ciudadana de la Personería de Cali
- Yolanda Jaguandoy / Técnica en sistema de acueducto y alcantarillado planta del rio Cali

1.4 Características Particulares

Al recopilar toda la información relevante sobre el problema se pudieron apreciar ciertas características que éste presenta. Por ejemplo, el manejo dado por las autoridades ambientales a la problemática ha ido evolucionando con el tiempo y seguirá evolucionando, dado diferentes aspectos, como lo son la efectividad de las ayudas sociales dirigidas a las personas que se dedican a la minería ilegal, y de los retenes militares, la presión por parte de la ciudadanía con ayuda del cubrimiento de los medios de comunicación.

También se observó la existencia de diferencias en la demostración de si existía o no un peligro para la salud de los caleños por beber el agua potable proveniente del Acueducto San Antonio. A este respecto la ciudadanía por medio de sus autoridades ambientales primero debió demostrar el uso del mercurio y cianuro por parte de la minería ilegal, pero debido a los problemas de orden público, las autoridades ambientales que querían demostrar el uso de estas sustancias debieron ser acompañadas por el ejército, pero la coordinación entre el ejército y estas autoridades ambientales no fue inmediata.

Para comprobar la existencia de contaminación con cianuro y mercurio en las aguas del río Cali. Algunas autoridades ambientales realizaron estudios sobre la calidad del agua potable proveniente del río Cali. Esto fue fundamental para la evolución de la problemática, por ejemplo, los hallazgos del estudio CVC (2011) sobre la presencia de minería ilegal en el río Cali, fortaleció la preocupación de la ciudadanía, lo cual dio más razones para presionar a las autoridades ambientales y así éstas intervinieran la problemática. El estudio de la CVC legitimó la preocupación por parte de la ciudadanía y la presión que ésta ejerció sobre la procuraduría agraria y ambiental para sancionar a la administración municipal de Jorge Iván Ospina, quien fue alcalde de Santiago de Cali entre los años 2008 y 2011.

Otra característica de la evolución de la problemática, fue que la presión de la ciudadanía, obligó a actuar a las autoridades ambientales. Cuando la ciudadanía presionó a las autoridades sancionatorias, éstas impusieron duras sanciones a las autoridades con la jurisdicción de la problemática, y así, estas empezaron a actuar. Como cuando la presión de la ciudadanía a los entes sancionatorios, y las sanciones de estas hacia la administración municipal de Jorge Iván Ospina repercutieron en el cierre de las minas del Socorro por parte de la siguiente administración municipal. Claro que en un principio dichas sanciones no fueron vistas de buena manera por todas las autoridades ambientales, hubieron algunas que las acataron inmediatamente mientras que otras usaron la propia institucionalidad para defenderse y demostrar lo que para ellos fue una sanción injusta. Muestra de esto fue cuando funcionarios de la administración de Jorge Iván Ospina mostraron estar en desacuerdo ante la sanción de la Procuradora Agraria y Ambiental.

Cuando las autoridades ambientales vieron que la problemática requirió la ayuda de otras autoridades, buscaron la manera de coordinarse para enfrentarla. Ocasionando que cada vez hubieran más autoridades ambientales involucradas, incluso hubieron entidades como medios de comunicación que influyeron en la evolución del manejo de la problemática, dado que por sus propios medios buscaron informar y corroborar el accionar de las autoridades ambientales, lo que aumentó el interés de la ciudadanía por el asunto y aumentó el peligro de que una autoridad ambiental como la CVC, o la administración municipal fueran sancionadas.

Los estudios, la preocupación de la ciudadanía, la presión de ésta, la preocupación de otras autoridades ambientales tuvieron repercusiones en el actuar de las Empresas Municipales de Cali (EMCALI). Esta entidad intentó demostrar que el agua potable que ellos proveen estaba en perfecto estado, para que la gente no entrara en pánico, y EMCALI no se viera afectada. Pero estas partes de tranquilidad sobre el agua potable no calmaron a ciertas autoridades ambientales como el PNN, la CVC, éstas y otras autoridades ambientales como el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA se empezaron a reunir.

Existía una falta de conocimiento frente a la magnitud del daño ambiental. Lo que llevó a que se realizaran recorridos en la zona y a que se hicieran más monitoreos, tanto a las aguas del río Cali como al agua potable proveniente del Acueducto San Antonio. Estos monitoreos y seguimientos al PNN, arrojaron como resultado que las personas que beben directamente del río Cali, pueden resultar afectados, y con el tiempo el agua potable proveniente del Acueducto San Antonio podría verse contaminada. Fue el miedo a un daño a la salud lo que ayudó a aumentar la coordinación entre las autoridades ambientales.

Con el tiempo gracias a las reuniones llevadas a cabo por las autoridades ambientales, se llegaron a ciertos acuerdos sobre cómo abordar la problemática. Tanto por el lado militar con la instalación de bases militares permanentes en las zonas de explotación minera, como con actividades de reforestación y con programas de ayuda social orientada a los mineros como lo fue la contratación de guardabosques por parte del, DAGMA y las Unidades Municipales de Asistencia Técnica, Umata. Pero a pesar de todos los intentos realizados, por la vía militar y o social, la minería ilegal todavía se sigue ejerciendo.

Como resultado del anterior análisis al problema socio-ambiental, se decidió usar la Economía Política y Ambiente para responder a la pregunta exploratoria. Debido a que ésta teoría aborda la toma de decisiones colectivas en situaciones en las cuales se presenta una disparidad de intereses. Este Marco Teórico hace uso de la Economía Política y Ambiente, Ecología Política e Incertidumbre. Ésta última teoría fue usada porque al inicio de la problemática las autoridades ambientales no lograron un consenso en cuanto a si existía o no la contaminación en el río Cali, creándose así una incertidumbre.

2. Marco Teórico

La contaminación causada por la minería ilegal que se ejerce en los Farallones, puede llegar a afectar la calidad del agua potable proveniente del Acueducto San Antonio. La sociedad debió tomar decisiones que le ayudarán a asegurar la calidad del agua potable, estas decisiones fueron influenciadas por las propias características de la problemática, como lo fueron los distintos intereses que presentaron los diferentes actores, la incertidumbre sobre si existía o no la contaminación con mercurio y cianuro en las aguas del Río Cali, entre otras características. Para responder a la pregunta ¿Cómo la sociedad enfrentó el problema de contaminación? se hizo necesario recurrir a la Economía Política. Debido a que ésta teoría aborda la toma de decisiones colectivas en situaciones donde se presentan diferentes intereses, también se usaron teorías como la Economía Política y Ambiente, Ecología Política e Incertidumbre.

Empezando por la Economía Política, se tiene como referencia a los autores Caporaso y Levine (1992). Estos autores toman en cuenta diferentes concepciones a lo largo del tiempo para poder obtener una definición de lo que es la Economía Política, para hacerlo toman en cuenta diversas definiciones de lo que es la economía y política, llegando así, a que la Economía Política se encuentra relacionada con la esfera pública y las relaciones de abastecimiento material de las personas, también puede ser vista como la relación entre la economía y la política.

Caporaso y Levine (1992) se refieren al concepto de Hanna Arendt (1958) donde define que lo público se relaciona con la forma en que se experimenta y construye una vida individual y colectiva, en donde las decisiones colectivas han partido de intereses individuales. Para Caporaso y Levine la elección pública recae sobre cuestiones públicas, bienes públicos e intereses públicos, identidades colectivas y valores compartidos, importantes para el discurso político, en donde los intereses individuales se coordinan de manera colectiva para alcanzar un óptimo social.

Existen otros autores que abordan el tema de la Economía Política, uno de ellos es Drazen (2001). Para él, la Economía Política inicia con la toma de decisiones de carácter político, y cómo estas afectan las opciones económicas de una sociedad, la cual incluye empresas, grupos sociales u otras organizaciones. Para Drazen, lo fundamental para que pueda existir la Economía Política es la existencia de una heterogeneidad de intereses. Esta heterogeneidad de intereses es fundamental para que existan limitaciones dentro de la sociedad. Drazen (2001) se pregunta cómo una sociedad hace elecciones colectivas donde los individuos tienen intereses en conflicto, intereses entre actores económicos de la sociedad, para Drazen en la economía política es necesario que haya conflicto de intereses para que así existan restricciones políticas, estas heterogeneidades generan conflicto, debido a que el planificador

social, quien toma las decisiones políticas y económicas dentro de la sociedad, no puede tener en cuenta cada uno de los intereses individuales, por ello él realiza una elección política, la cual beneficia a la mayoría.

La Economía Política presenta una variación conocida como la NEP o Nueva Economía Política. Según Besley (2007), ésta teoría pretende tratar temas relevantes del campo de la política, busca abordar la intervención gubernamental y por tanto requiere entender los procesos de toma de decisiones en diferentes escenarios institucionales y sus efectos económicos. Además de lo anterior, la Nueva Economía Política busca que los economistas quienes se quedan cortos al abarcar aspectos de la sociedad tales como las decisiones políticas, puedan tener nuevas herramientas que le permitan ampliar su campo de análisis.

Para Besley (2007) en la década de los ochenta existía una noción de una función de bienestar, eficiencia e igualdad. Esto era debido a que la Economía Política era dominada por el paradigma pigouviano, el cual estudiaba la intervención óptima dada las fallas de mercado. Según Besley (2007) existe una necesidad de ponderar la insuficiencia del gobierno a la hora de enfrentarse a las fallas del mercado, para el autor no es necesario que haya fallas del mercado para poder intervenir. El autor también habla sobre la heterogeneidad de intereses. Para el autor la sociedad se divide entre gobernados y gobernantes, y es la diferencia entre los intereses de estos, lo que dificulta la resolución de los conflictos, otro factor que influye es la responsabilidad limitada debida a la información imperfecta. Por último Besley (2007) dice que los resultados de las políticas están siendo afectadas por los medios de comunicación. Los cuales, han informado a la ciudadanía sobre la situación presente en el PNN Farallones de Cali, la evolución de la problemática se deba en parte a la presión de los medios de comunicación.

Otra teoría que se usó para analizar el problema socio-ambiental fue la Economía Política y Ambiente. Como su nombre lo indica, el medio ambiente juega un papel fundamental dentro de su campo de análisis, un autor quien trata ésta teoría es Boyce (2002). Para Boyce, una distribución equitativa del poder y de la riqueza es una condición para proteger el medio ambiente. El autor propone a la democracia para cumplir con esta distribución, pero ésta no es una panacea, pues la democracia depende de los valores de las personas, si nadie se opone a respirar aire sucio nada va a cambiar. Boyce propone otras alternativas diferentes a la democracia para lograr una distribución equitativa del poder y la riqueza, como aumentar el acervo de capital natural de los pobres, redistribuir el capital natural, aumentar la habilidad de los pobres para obtener beneficios de los activos ambientales que ya poseen, establecer derechos igualitarios a los recursos de libre acceso. El autor dice que en los conflictos, existen los ganadores y los perdedores. Los ganadores son aquellos que reciben los beneficios provenientes de la explotación del medio ambiente, y reciben poco o nada de los efectos adversos de esta explotación, mientras que los perdedores se ven muy poco beneficiados o nada de la explotación del medio ambiente, pero si reciben los efectos negativos de dicha explotación, hay varios tipos de perdedores, los perdedores que no existen todavía, no han nacido pues pertenecen a una generación futura, o los perdedores que no tienen la información necesaria para actuar o la tienen pero no tienen el poder para prevenir los costos ambientales.

El autor analiza las distintas dimensiones del poder, que se manifiestan en la sociedad y que hacen parte de la distribución de la toma de decisiones. Estas diferentes dimensiones del

poder son el poder de compra que es el que uno puede pagar, el poder de decisión que es imponer las preferencias a otros, el poder de agenda que es determinar qué es lo más relevante a debatir en el interés público, el poder de valor que es influir sobre lo que otros desean. En distintas ocasiones puede ocurrir que un tipo de poder influya a otro, pero al tratarse de las decisiones éstos actúan en conjunto.

Otra teoría que se usó fue la Ecología Política. Para Marcellesi (2012) la ecología política surge en un momento histórico preciso y responde a una determinada crisis social, ecológica y económica que los otros pensamientos mencionados no sólo no habían previsto sino que incluso habían provocado. Esta teoría también aporta una visión crítica, transformadora y global que vincula permanentemente a los aspectos ecológicos y sociales.

Para seguir con la Ecología Política se hizo referencia a otro autor. Robbins (2004) dice que lo principal en la ecología política es ver la relación entre economía, política y naturaleza, en donde se busca mostrar como las teorías dominantes tienen fallas a la hora de tratar el ambiente, beneficiando al Estado y a las corporaciones, para ello desde el punto de vista de varios grupos marginales, expone los impactos negativos de las políticas y las condiciones del mercado, esto es a lo que Robbins (2004) se refiere al decir que la ecología política es un “hacha”. El autor también se refiere a la ecología política diciendo que es una “semilla”, con esto hace referencia a la documentación que ésta hace de la forma en que las personas se unen frente al cambio ambiental.

Para Robbins (2012) esta teoría cuenta con unos supuestos comunes, uno de ellos es que el cambio ambiental y las condiciones ecológicas, son el producto de procesos políticos, otro de sus supuestos es que las consecuencias del cambio climático, son distribuidas de manera inequitativa entre los diferentes actores, reforzando o reduciendo las inequidades sociales y económicas que ya existen. En el caso del río Cali, el cambio climático se ve reflejado en que los comportamientos en los caudales del río no son similares en verano e invierno, por lo que la posibilidad de que llegue agua contaminada a la planta de San Antonio se ve afectada por este factor.

Otra característica de la problemática socio-ambiental es que no existió un consenso general entre las autoridades ambientales. Sobre si la contaminación con mercurio y cianuro en el río Cali, podría llegar a afectar el agua potable. Y si la respuesta es positiva, no se sabe a ciencia cierta cuándo ocurriría esta afectación, y que tan grave podría llegar a ser, por ende, se hace necesario recurrir a diferentes autores para tratar el tema de la incertidumbre.

Para Funtowicz y Ravetz (1993) la incertidumbre se da cuando es imposible la cuantificación del riesgo. A pesar de todos los monitoreos que se han realizado a la calidad del agua potable y del agua del río Cali, las autoridades ambientales no tienen manera de saber cuándo se puede llegar a afectar el agua potable, por lo tanto, este riesgo no se puede cuantificar de manera temporal, pues existe una clara incertidumbre en términos de los anteriores autores.

El nivel político busca con urgencia una solución a los intereses en la problemática en torno a desastres naturales, cuando ante el nivel técnico no ha logrado dar respuestas contundentes ante estos. Para afrontar esta incertidumbre se necesita ampliar el número de sujetos que deciden sobre la cuestión, manejando así el consenso público (Natenszon, 1995). Debido a que en un principio, existía un desconocimiento general en cuanto a la afectación generada por la minería ilegal, lo que corresponde a una falta de respuesta contundente por parte del nivel

técnico, algunas autoridades ambientales como Parques Nacionales exigieron por medio de foros, la presión de otras autoridades ambientales para destinar más recursos y enfrentar la problemática, lo que ayudó a ampliar el número de involucrados en solucionar la minería ilegal, lo que aumentó el consenso público para manejar la incertidumbre.

Para Marchiori (2009) los seres humanos viven inmersos en la incertidumbre, no importa que actividad se realice, la incertidumbre es algo inherente a las personas, cuando estás se proyectan hacia el futuro solo logran agudizar la incertidumbre. Para Marchiori existen varias clases de incertidumbre:

- La incertidumbre material, como lo es el alimento, el frío, la inseguridad económica, estas incertidumbres llevaron a que muchas personas abandonen sus oficios e incurran en la ilegalidad, buscando así disminuir su incertidumbre material.
- La incertidumbre del conocimiento; lo que se sabe es debido a los sentidos, pero siempre habrá incertidumbre. Es por esto que en el caso particular se realizaron tantos monitoreos al agua del río Cali, para disminuir la incertidumbre generada sensorialmente, pues estos no podían decir a ciencia cierta si había o no contaminación en las aguas del río Cali.
- La incertidumbre social, la cultura y las autoridades ambientales nacieron para poner orden y disminuir la incertidumbre social. Las personas recurrieron a las autoridades ambientales para enfrentar los problemas de orden público que trajeron consigo la emigración de personas proveniente de otras zonas, buscando disminuir la incertidumbre social, vista en el peligro que la minería ilegal ocasiona a sus alrededores. Una institución es una organización ordenadora del pensamiento y de la acción (Marchiori, 2009). Las personas buscaron a la Procuradora Agraria, para que esta actuara, para que esta contribuyera al orden del pensamiento institucional, para combatir la minería ilegal.

Ante la intención de mitigar los desastres naturales, las sociedades democráticas buscan que todos los sectores sociales involucrados participen de forma decisiva, en el diseño, gestión e implementación de políticas de prevención y de mitigación. El inconveniente para lograr resultados efectivos, es dejar a un lado las manipulaciones sectoriales (Natenzon, 1995). La sociedad es democrática y esto se vio reflejado en la participación de distintas autoridades ambientales, en representación de distintos sectores de la ciudadanía, con lo cual se logró llegar a políticas de mitigación, como las intervenciones militares y políticas de prevención como la realización de los monitoreos e intervenciones sociales. Tomó tiempo llegar a esta articulación, pero dio resultados efectivos aunque sea en cuanto a determinar el conocimiento de la afectación de la minería ilegal.

3. Metodología

Esta investigación considera la problemática socio-ambiental que ocurre en los Farallones de Cali. En donde la contaminación ocasionada por la minería ilegal puede llegar a afectar el suministro de agua potable para la ciudadanía. Para tratar la anterior problemática no se partió de ninguna hipótesis, más sin embargo se realizó una pregunta exploratoria, con el fin de poder observar cómo la sociedad enfrentó la contaminación. Para abordar la pregunta exploratoria se usó un análisis cualitativo. Para Rodríguez (2010) por investigación cualitativa se puede entender el estudio que proporciona una descripción verbal o

explicación del fenómeno estudiado, su esencia, naturaleza, comportamiento. Dado que queremos responder a ¿Cómo la sociedad enfrentó el problema socio-ambiental?, es necesario poder observar la evolución de la problemática que se está estudiando.

El análisis cualitativo también presenta una serie de características que resultaron de utilidad para el desarrollo de la investigación. Para Rodríguez (2010) la investigación cualitativa supone el uso de una perspectiva integral, reconoce la diversidad de casos y situaciones. Dado que la problemática presentó una gran diversidad de situaciones que influyeron en su evolución, se hizo necesario realizar un análisis desde una perspectiva integradora.

Schettini (2015) dice que la investigación cualitativa se centra en la construcción social de la realidad, en donde existe una relación íntima entre el investigador y lo que estudia. En la observación de la evolución de la problemática, se encontró distintos puntos de vista, pertenecientes a los distintos actores, con lo cual se fue construyendo una realidad. Por ello, para terminar de responder a la pregunta de investigación se recolectó toda la información relevante que se pudo encontrar, desde el 2 de mayo del 2011 hasta el 15 de abril del 2016. Se recurrió a distintas fuentes de información, como notas de prensa, estudios realizados por la CVC, Personería Municipal de Cali, entre otras. El análisis cualitativo permite usar diferentes métodos para recolectar información, métodos que permitan tener en cuenta el punto de vista de las personas (Vargas, 2012).

La entrevista fue escogida como método para recolectar información. Según Fontana y Frey (2005), la entrevista permite la recopilación de información detallada en vista de que la persona que informa comparte oralmente con el investigador aquello concerniente a un tema específico o evento acaecido en su vida. Para Wengraf (2012) la información que se obtiene en una entrevista, es una construcción dada la interacción entre el entrevistador y el entrevistado, permitiendo mejorar el conocimiento, pues la entrevista es una interacción conversacional cara a cara. Debido a las características de la entrevista, se realizaron 9 de éstas a los diferentes actores claves de la problemática socio-ambiental, a cada actor clave se le realizó 17 preguntas. Las personas entrevistadas fueron etiquetadas con letras, debido a que ellas pidieron manejo confidencial de la información suministrada.

Para Rodríguez et al. (1996) la investigación cualitativa posee cuatro fases, las cuales fueron usadas en ésta investigación. La primera de ellas es la fase preparatoria, en donde se diseña la investigación. En esta fase, se consultaron notas de prensa, estudios realizados por las autoridades ambientales, entre otras fuentes, que ayudaron a construir el problema de investigación, también se buscaron las teorías que ayudaron a dar respuesta a éste, se propone la metodología a usar y la manera en que se recolectarán los datos. La segunda Fase es el trabajo de campo, en donde aplica la forma de recolectar la información. En esta investigación se aplicó una entrevista semi estructurada (Apendice), la cual consta de 17 preguntas realizada a diferentes personas que desempeñaron un papel relevante en la problemática, desde funcionarios públicos hasta periodistas.

La tercera fase es la analítica, en donde se analiza la información que se pudo recoger. Cada una de las entrevistas fue analizada con detenimiento para poder obtener un mayor conocimiento sobre cómo la sociedad enfrentó la contaminación, la información obtenida por

las notas de prensa y estudios, fue organizada de manera cronológica, para que el análisis fuese más fluido y relevante. Por último la cuarta fase, la informativa, en donde se presenta los resultados de la investigación para poder establecer las decisiones colectivas de la sociedad en torno a la problemática socio-ambiental.

4. Decisiones Colectivas Frente a la Seguridad del Suministro del Servicio de Agua Potable.

Para el día 12 de abril del 2011 la actual procuradora Agraria y Ambiental Regional Lilia Estela Hincapié, interpuso una tutela contra el ex alcalde de Santiago de Cali, Jorge Iván Ospina. La tutela fue recibida por el Tribunal Administrativo del Valle, el objetivo de la tutela era obligar al municipio a cerrar las minas del Socorro ubicadas en la parte alta de Felidia, esto debido a la falta de accionar de la administración municipal, pues desde año y medio, las autoridades ambientales sabían de la actividad minera ilegal que se llevó a cabo en esas minas. Al respecto, Jorge Iván Ospina se pronunció asegurando que el cierre de las minas ya se había realizado pero faltó vigilancia permanente en la zona (El País, 2 de mayo, 2011).

Estudios como el de CVC (2011) evidenciaron que los afluentes del río Cali, río Felidia, río Pichindé y otros, presentaron una concentración de cianuro y mercurio que excedieron las normas nacionales e internacionales (El País, 2 de mayo, 2011). Las Empresas Municipales de Cali, EMCALI, al ver las advertencias hechas por el estudio de la CVC, se expresaron por medio de su entonces gerente de Acueducto y Alcantarillado Freddy Mantilla. Este aseguró que el agua proveniente del Acueducto San Antonio presentó una excelente calidad, EMCALI en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2010, realizó toma periódica de muestras antes de la bocatoma de San Antonio, en donde se obtuvieron resultados que no se salían de la normatividad (El País, 3 de mayo, 2011).

Dada la tutela, el día miércoles 4 de mayo del 2011, empezó un operativo para cerrar los supuestos 40 socavones que hay en las cuencas de los ríos Pinchindé y Felidia. El operativo fue realizado por una comisión encabezada por la administración municipal, 130 hombres del Batallón de Alta Montaña, funcionarios de la CVC, el Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas y Parques Nacionales. El resultado del operativo fue el censo de 140 mineros, además, se encontraron 5000 metros cuadrados de vegetación afectada, también se encontraron alrededor de 70 máquinas usadas para procesar la roca y poder extraer el oro (El País, 5 de mayo, 2011).

El operativo ocasionó que los mineros empezaran a irse de la zona, no sin antes haberle expresado al ex alcalde, la posibilidad de que les permitiera procesar la roca. El ex alcalde de Cali les dijo a los mineros, que en su mayoría vinieron de zonas como el Cauca y Nariño, que no era posible procesar la roca, pues esta decisión quedaba en manos de PNN y del Ministerio del Medio Ambiente, lo cual generó malestar entre los mineros y estos expresaron su decisión de continuar con la minería ilegal (El País, 12 de mayo, 2011).

Tiempo después del operativo realizado por la administración municipal y otros entes gubernamentales, se emitió una sanción en contra de Jorge Iván Ospina. La magistrada Berta Lucía Gonzales por medio del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca,

emitió una sanción el día 9 de diciembre del 2011. La sanción consistió en dos días de arresto y una multa de 5 salarios mínimos legales vigentes debido a que, según ella, no se cumplió la orden de realizar el cierre técnico de las minas ilegales del Socorro. Por esta razón Jorge Iván Ospina elaboró un escrito mostrando todo el accionar realizado por parte de la alcaldía para frenar la minería ilegal presente en el PNN Farallones de Cali (El País, 19 de diciembre, 2011).

María del Pilar Cano Sterling, quien para ese momento era la directora Jurídica de la alcaldía, no se estuvo de acuerdo con la sanción. Según ella, la razón por la cual se impuso, es porque la procuradora ambiental se quejó ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, por la presencia de minería ilegal en la zona. Para la funcionaria el ex alcalde si cerró las minas, además la decisión debió ser consultada ante el Consejo de Estado pues se trataba de una privación a la libertad, por lo cual no implicó su inmediato cumplimiento (El País, 16 de diciembre, 2011).

El diario El País, se encontró en desacuerdo con lo expresado por María del Pilar Cano Sterling. Pues ellos manifestaron que Jorge Iván Ospina solo realizó actos administrativos, en donde expresó la prohibición de ejercer actividades mineras en la zona. La Alcaldía no desalojó los asentamientos humanos, por lo tanto, no cumplió con la terminación de la minería ilegal, acción exigida por tres fallos judiciales. Además de esto, tampoco cumplió con dos órdenes impuestas por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, una consistió en realizar el cierre técnico de las minas, la otra orden impuesta, consistió en que junto con la CVC recuperaran el sector Altos de Normandía, por este motivo el ex alcalde se arriesgó a ser sancionado con arresto similar o mayor al ya impuesto (El País, 19 de diciembre, 2011).

Lo anterior es un ejemplo de que algunas veces solo se ejerció la autoridad de manera temporal, mientras se disipaba la preocupación de la ciudadanía y de otras autoridades ambientales. Si la autoridad debió ejercerse por partes, como intervención y luego control y vigilancia, solo se llegó a la primera parte debido a los intereses publicitarios o de mantener una buena imagen por parte de las autoridades ambientales o de algunos funcionarios pertenecientes a éstas. Como cuando la administración municipal de Jorge Iván Ospina realizó el operativo pero no realizó el cierre técnico de las minas del Socorro, debido a esto el ejército y la policía ejercieron su autoridad, con lo cual se generó un miedo entre los mineros, pues algunos de ellos fueron capturados, lo que contribuyó a que las personas que habitaban la zona creyeran que existía una autoridad que estaba interviniendo la problemática, pero al no haber una debida judicialización, este miedo se perdió y tambaleó la idea de que existía una autoridad que controlaba la zona, pues los mineros se dieron cuenta de que si los capturaban era muy probable que luego los dejaran en libertad, y pudieran continuar con las actividades de minería ilegal (Entrevistados F y A, 2016).

Ante la sanción impuesta por el Tribunal Contencioso, María Jazmín Osorio ex directora de la CVC mostró interés en cumplir la orden, pues para ella, el incumplimiento de esta, pudo haber llegado a ser un desacato. Según ella, para que dicha corporación hubiera cumplido con el fallo que la obligó a recuperar el sector Altos de Normandía, era necesario que la policía hubiese cumplido con la finalización de la minería ilegal y así ellos hubiesen podido iniciar la recuperación ambiental, la cual se les ordenó. Según la CVC el costo de recuperación de dicho sector estuvo valorada en unos 757 millones de pesos, además de este proceso de

recuperación se contempló que por medio de 700 millones de pesos se realizaría una recuperación ambiental en el cerro La Bandera (El País, 19 de diciembre, 2011).

La entonces Subsecretaría de Policía y Justicia, Patricia Inés Corina Rojas, reconoció en un escrito, que el cierre definitivo de las minas no se había realizado. Según ella para haber cerrado de manera definitiva las explotaciones ilegales, se necesitaron 306 millones de pesos, también dijo que luego del cierre administrativo, la policía, debido al miedo ejercido por la vigilancia como los órganos de control y las comunidades ubicadas en esa zona, no realizó la vigilancia correspondiente en el sector para poner freno a la minería ilegal (El País, 19 de diciembre, 2011).

El ejercicio de autoridad se enfrentó a ciertos desafíos que pudieron demorar o incluso impedir que las autoridades ambientales lograran ejercer su autoridad. Como la falta de fondos que presentaron algunas autoridades para poder actuar, como cuando la Policía admitió no haber cerrado las minas por la falta de 306 millones de pesos, otras causas como la falta de voluntad de éstas para abordar la problemática, la falta de presión por parte de la ciudadanía que obligara a las autoridades ambientales a ejercer su autoridad, obligándolas a cambiar sus propios intereses, la situación intrínseca del problema, como la inseguridad presente en algunas zonas de los Farallones, lo cual ocasionó que la CVC por medio de María Jazmín Osorio, ex directora de la CVC, alegara no haber cumplido con la orden pues necesitaba que el ejército primero terminara con la minería ilegal presente en la zona (Entrevistado C, 2016).

Las autoridades ambientales fueron obligadas a ejercer su correspondiente autoridad, por medio de la presión de los medios de comunicación. Como cuando el diario El País verificó el accionar de la administración Municipal de Jorge Iván Ospina, al comunicar acerca de las alarmas generadas por una posible contaminación al agua potable. El miedo a un daño a la salud de un número tan grande de personas repercutió en el intento de ejercicio de autoridad por parte de algunas instituciones ambientales. También repercutió en las sanciones a las cuales algunas se vieron enfrentadas, por lo cual entes como la CVC se vieron motivados para actuar y así poder evitar una fuerte sanción o ser el centro de atención de una gran parte de la ciudadanía, lo que contribuyó a que las autoridades ambientales se movieran hacia el interés común (Entrevistado D, 2016).

Solo hasta la segunda semana de abril del 2012, se dio respuesta al fallo de la tutela. Pues la administración del ex alcalde Rodrigo Guerrero, empezó a cerrar las minas del Socorro. Carlos José Holguín Molina, ex secretario de Gobierno de Cali, afirmó que 2,5 toneladas de explosivos y algunos ingenieros, fueron transportados por el ejército. En los operativos se contó con la ayuda de distintas autoridades ambientales en distintas áreas, como INGEOMINAS, Parques Nacionales, Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, la CVC, la Personería, y de la Procuraduría Ambiental. Estos operativos se demoraron unas tres semanas, en las cuales, según la anterior administración municipal, se cerraron todas las minas del Socorro, que en total fueron 78 socavones, y para evitar que esta actividad prosiguiera, Carlos José Holguín Molina, dijo que Parques Nacionales junto con inspectores de Policía vigilarían y controlarían la zona (Alcaldía de Santiago de Cali, 2012).

El ejercicio de autoridad fue un proceso en cadena, en el cual primero actuaron aquellas autoridades ambientales con funciones de vigilancia y sancionatorias obligando a la autoridad

ambiental a actuar. Una muestra de ello fue cuando el 12 de abril del 2011, la Procuradora Agraria y Ambiental interpuso una tutela contra Jorge Iván Ospina y esto ocasionó que el 4 de mayo la administración municipal realizara un operativo en contra de la minería ilegal, otro ejemplo fue cuando la magistrada Bertha Lucía Gonzales por medio del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca emitió una sanción el 9 de Diciembre del 2011 en contra de la alcaldía municipal por no haber realizado el cierre técnico de las minas del socorro, lo que llevó a que en la siguiente administración del ex alcalde Rodrigo Guerrero en la segunda semana de abril del 2012, cerrara todas las minas en un operativo que duró tres semanas (Entrevistado B y H, 2016).

Las quejas de la ciudadanía también jugaron un papel importante en la evolución de la problemática. Estas presionaron a las autoridades ambientales vigiladas y sancionadas para que empezaran a desempeñar un papel más activo en la problemática, con lo cual no solo se mostraron más activas, sino que también mostraron una mayor disposición a colaborar entre ellas, dejando de lado la actitud de solo intervenir en la zona que les corresponde legalmente, claro que en el tramo de tiempo analizado, no todas mostraron el mismo interés por colaborar (Entrevistado B y H, 2016).

La Universidad ICESI llevó a cabo el primer Foro de Derecho Ambiental, al cual asistió la Procuraduría Ambiental del Valle y la Unidad de Delitos Ambientales de la Fiscalía. Nélver Castro, profesional especializado del área de Participación Ciudadana de la Personería de Cali, quien se encontraba en el foro, realizó un llamado de atención, pues para él, existía un número considerado de personas que estaban ejerciendo la minería, y lo más seguro es que usaran sustancias para amalgamar el oro, en la cuenca del río Cali. Pero según él, existió cierta tranquilidad, pues en las mediciones pedidas a EMCALI, hechas en la Planta Río Cali y en su entrada de agua pura, no hubo evidencia de sustancias como el mercurio y el cianuro. La Personería de Cali solicitó a la CVC los análisis de laboratorio de niveles de mercurio y cianuro del río Cali, pero hasta ese momento no había respuesta por parte de la CVC, por esta razón Lilia Stella Hincapié solicitó públicamente los resultados de las mediciones (El País, 19 de abril, 2013).

Jaime Celis director de PNN Farallones de Cali quien también se encontraba en el Foro, expresó el desconocimiento que se tenía de las áreas afectadas por la minería ilegal. Debido a problemas de orden público no se había podido hacer nuevas exploraciones, dijo que habían circulado pasquines en donde se informaba sobre la presencia de “Los Urabeños”. Esto generaba que se tuviese miedo para entrar en la zona, lo cual impedía que se tuviese total conocimiento de los daños ambientales. Jaime Celis dijo que en esa semana de abril del 2013, iban a realizar controles pero al no haber podido acordar el acompañamiento con el Ejército, dichos controles no se habían podido realizar (El País, 19 de abril, 2013).

Las autoridades ambientales continuaron realizando más reuniones acerca de la minería ilegal presente en los Farallones. La Procuraduría Ambiental, la Defensoría del Pueblo, las Contraloría de Cali y Valle del Cauca, lideraron El Comité Regional de Moralización del Departamento, llevando a cabo una Audiencia Regional Ambiental. En esta audiencia, la contralora delegada de Minas y Energía, Ana María Silva, expresó su preocupación, pues los niveles de mercurio del río Cali estaban 1355% por encima de la norma, dados por la CVC (2011). La contralora pidió que las autoridades locales dieran una cifra segura de la presencia de mercurio en el agua potable que toman los caleños. No se hizo esperar una respuesta ante

una alerta de tal magnitud y voceros de la CVC dijeron que en el último muestreo que se realizó entre septiembre y octubre del 2012, se usaron equipos en malas condiciones y por eso se detectaron altos niveles de mercurio en la parte alta del afluente (El País, 11 de septiembre, 2013).

Emcali al ver la alerta generada por la contralora se pronunció por medio de Claudia Devia profesional de Ensayos y Calibraciones del Laboratorio de Agua potable. Ella afirmó que dada las muestras mensuales tomadas en la bocatoma y en la red, los niveles de mercurio no fueron peligrosos, pues el nivel de mercurio en el agua tratada fue de cero, además de esto funcionarios de la alcaldía se sumaron a los voceros de la CVC y desvirtuaron lo dicho por la contralora, también alegaron que por daños técnicos en los equipos de la CVC la cifra era incorrecta (El País, 11 septiembre, 2013).

La CVC y Emcali pretendieron por algún tiempo demostrar que no había contaminación en las aguas del río Cali. Esto debido a la intención de algunos funcionarios por mantener limpia su imagen y así poder acceder a futuros mejores puestos dentro del Estado, por ende no les convenía aceptar la existencia de este tipo de conflictos, que dado el mal manejo por parte de algunos entes todavía logra persistir. Una muestra de ello fue cuando funcionarios de la CVC desvirtuaron lo dicho por Ana María Silva Contralora delegada de Minas y Energía sobre un alto nivel de mercurio en el río Cali, debido supuestamente a que los equipos se encontraban en malas condiciones (Entrevistado E, 2016).

Cuando se daba una noticia sobre la problemática, ocasionaba que la ciudadanía le prestase atención al desempeño de las autoridades ambientales. Estas siempre alegaban haber realizado las intervenciones necesarias en su parte de la cuenca, demostraban que no les importaba incluso como estuviera la situación, lo que importaba era que la ciudadanía se percatara de que ellas hicieron lo que les correspondió en su zona de jurisdicción. Siempre querían quedar bien ante la atención de los medios de comunicación, como cuando la Contralora dio una gran advertencia sobre el riesgo de contaminación e inmediatamente EMCALI, informa que el nivel de mercurio en el agua tratada fue de cero. Otros actores como las administraciones municipales demostraron su interés por mantener una buena imagen para así ganar votos, y como esta problemática no ha sido del interés de la ciudadanía en general, pues intervenirla no daría una gran cantidad de votos (Entrevistado D, 2016).

Dentro de los impedimentos al ejercicio de autoridad también se encuentra el uso de poder de agenda. Pues algunas autoridades ambientales pudieron hacer que la problemática del río Cali no estuviera dentro de los temas a debatir por parte de la ciudadanía. Un ejemplo de ello es la preocupación expuesta en el foro derecho ambiental llevada a cabo por la Universidad ICESI en abril del 2013, en donde funcionarios de la CVC minimizaron esta preocupación. Pero el poder de agenda de Parques, de la Personería de Cali, de la Contralora Ambiental contribuyeron a que al problema se le prestara atención, los medios también cuentan con poder de agenda pues con sus noticias la ciudadanía se alarma y el tema se entra a debatir.

Estas diferentes dimensiones de poder presentadas en el problema socio-ambiental, tuvieron repercusiones en la toma de una elección colectiva. El bajo poder de compra de los mineros repercutió en el interés por encontrar una manera de sobrevivir sin importar que generaran contaminación, con lo cual se desencadenó la problemática. Algunas autoridades ambientales con su poder de agenda hicieron que la problemática socio-ambiental fuese el tema central de

muchas reuniones que se llevaron a cabo, con lo cual la elección colectiva giró en torno a la problemática ambiental. Otras autoridades ambientales demostraron poseer poder de valor ya que por medio de sus alertas, influenciaron la opinión de la ciudadanía para que esta presionara a que algunas autoridades ambientales intervinieran la problemática.

Dada la preocupación mostrada por la contralora, la CVC realizó un monitoreo de cinco días, entre el 12 y el 16 de septiembre del 2013. El 30 de septiembre la CVC entregó los resultados de las pruebas a muestras tomadas en la cuenca del río Cali en tres puntos específicos, las muestras estaban de acuerdo con los estándares vigentes en el país determinados por el decreto 1594 de 1984, artículo 38, previo a tratamiento. Esta información complementó los resultados de análisis obtenidos a lo largo de 18 monitoreos realizados en el 2012, según declaraciones hechas por Libardo Campo ex director general de la CVC, “solo los días 23 de julio y 24 de septiembre del 2012 se encontraron trazas por encima de los límites establecidos, en el resto de mediciones en el 79 por ciento de los monitoreos el mercurio no fue detectable y en el 13 por ciento se detectó en niveles inferiores al límite establecido por la normatividad” (El TIEMPO, 1 de octubre, 2013).

Algunas autoridades ambientales no se conformaron con estos partes de tranquilidad y persistieron en monitorear la situación. La personería de Cali en octubre del 2014 realizó un seguimiento al PNN Farallones de Cali en donde pudo comprobar que las actividades de minería ilegal usaron sustancias como mercurio y cianuro, se buscó comprobar la presencia de estas sustancias en las fuentes hídricas que nacen en los Farallones. Para esto la Personería de Cali pidió a la CVC cumplir un fallo judicial, que la obligó a realizar monitoreos en las fuentes hídricas. En el seguimiento realizado al PNN Farallones de Cali, se encontraron graves daños ambientales, como 136 hectáreas de páramo y 116 hectáreas de bosque alto andino afectadas por la minería ilegal, la remoción de suelos para construir campamentos, destruyó la capa vegetal, existió vertimiento de aguas residuales a las fuentes hídricas, hubo presencia de erosión y deforestación, además de todo esto se encontraron 63 socavones, 13 campamentos en el área protegida del PNN Farallones (El País, 15 de octubre, 2014).

La Asamblea del Valle realizó otro foro sobre la minería ilegal, en la cual la entonces directora general de Parques Nacionales Beatriz Niño estuvo presente. Ella dijo que Cali fue la población más grande del país que estuvo en riesgo por la contaminación del recurso hídrico debido a la minería ilegal en el PNN Farallones, la contaminación con mercurio y cianuro producida por la minería ilegal puede afectar a la ciudadanía. Según ella, se les pidió a varios funcionarios de la entidad que se examinaran, encontrando presencia de mercurio en sus cuerpos, por esto la entidad tomará muestras de la calidad del agua en varios ríos que se originan en los Farallones (El País, 19 de noviembre, 2014).

Jaime Celis quien también se encontraba en el anterior foro realizado por la Asamblea del Valle, (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2014) dio a conocer los impactos ambientales que se presentaron en el PNN Farallones: Apertura de nuevas trochas, adecuación de caminos, tala selectiva de algunas especies, fragmentación de ecosistemas, contaminación química de fuentes hídricas, desviación de cuerpos de agua, remoción de suelos en masa, cambios del uso del suelo, contaminación por disposición y manejo inadecuado de residuos sólidos, líquidos y aguas servidas. Parques Nacionales había tomado muestras en afluentes que pasan por 5 campamentos mineros, todas las muestras presentaron cifras mayores a las permitidas. Dado que muchos funcionarios presentes en el anterior foro

alegaron desconocer la situación, el personero Andrés Santamaría le pidió a la Secretaría de Salud investigar los impactos en la salud de los habitantes de Cali (El País, 19 de noviembre, 2014).

Al terminar el foro, los diputados del Valle del Cauca llegaron a unos compromisos. Junto a la CVC coordinar la toma de muestras de agua y sedimentos a las fuentes hídricas que están siendo afectadas por la minería ilegal, para así determinar la presencia o no de sustancias nocivas para la salud humana como lo son el mercurio y el cianuro, también se buscará crear puestos de control institucional en el PNN Farallones de Cali, con un grupo élite conformado por varias autoridades ambientales para enfrentar a la minería ilegal (El País, 19 de noviembre, 2014).

Las anteriores reuniones sirvieron para que las autoridades ambientales vencieran sus propios intereses y así naciera el interés común de cuidar la calidad del agua potable. Muestra de ello fueron los acuerdos alcanzados por los diputados del Valle en el foro realizado por la Asamblea del Valle en donde distintas autoridades ambientales tuvieron participación. Algunas autoridades ambientales se reunieron debido a la presión mediática de los medios de comunicación, las posibles sanciones disciplinarias que pondrían en duda su buena imagen, las quejas de la ciudadanía, lo cual pudo influenciar en algunas votaciones, o ascenso a mejores cargos dentro de la institucionalidad, la evidencia de contaminación en las aguas del río Cali y por ende una posible afectación a la calidad del agua potable suministrada por la planta de San Antonio (Entrevistado B y F, 2016).

Dado que fue imposible cuantificar el riesgo por no saber si se daría la afectación a la salud, existió una incertidumbre. Y dada esta incertidumbre la ciudadanía amplió el número de personas que deciden sobre la problemática, por esto se dieron reuniones en donde participaron un mayor número de entes gubernamentales, un ejemplo de ello fue cuando la Procuraduría Ambiental, la Defensoría del Pueblo, las Contralorías de Cali y Valle del Cauca lideraron el Comité Regional de moralización del Departamento.

Estas reuniones se realizaron con el objetivo de que las autoridades ambientales tomaran una elección pública en torno a la seguridad en la prestación del servicio de agua potable. Este tema asunto es una cuestión pública, en donde hay intereses públicos por parte de las autoridades ambientales y la ciudadanía. Por ende fueron las autoridades ambientales las encargadas de llevar a cabo las elecciones colectivas. Elecciones que fueron decididas en medio de un conflicto de intereses que se presentó entre los mineros y la ciudadanía y las propias autoridades ambientales. Los intereses de los mineros por lograr su sustento haciendo caso omiso de la contaminación que generan se contraponen a los intereses de ciertas autoridades ambientales por frenar la actividad ilícita y asegurar la calidad del agua potable proveniente del Acueducto San Antonio, además al inicio de la evolución de la problemática socio-ambiental habían intereses opuestos dentro de las mismas autoridades ambientales pues unas alegaban que no existía contaminación en las aguas del río Cali y otros opinaban lo contrario.

Casi 4 meses después de haberse terminado el foro, voceros de la CVC causaron una nueva alerta. Ellos admitieron preocupación por la minería ilegal que ocurre en los Farallones, pero aun así, estos sostuvieron que en sus últimas mediciones se obtuvieron resultados seguros, pues el agua de los ríos Felidia, Pichindé y Cali, no presentaron concentraciones de

mercurio perjudiciales para la salud de los seres humanos. Además de lo anterior, esta institución realizó una petición a la secretaría de gobierno de Cali. La cual consistió en restringir el transporte de maquinaria y químicos dentro de la zona protegida del PNN Farallones para así poder detener las actividades de minería ilegal que se presentaron. Otra institución que realizó un seguimiento al PNN Farallones de Cali fue Parques Nacionales, quien encontró aproximadamente unas 5000 hectáreas afectadas por la minería ilegal y por invasiones de personas que buscaron un lugar tranquilo en el cual vivir (El País, 17 de marzo, 2015).

En ese mismo mes de marzo, otro importante funcionario que mostró preocupación fue el Secretario de Salud Harold Suárez. Quien al socializar manifestó que mientras exista la minería ilegal en la zona, con el tiempo se pueden contaminar el agua y los acueductos (Personería Municipal Santiago de Cali, 2015), por su parte esta entidad realizó mediciones y gracias a estas se concluyó que el agua de las cuencas de los ríos que abastecen a Cali no representaron ningún riesgo para la salud humana, aun así, la Personería Municipal verificó la presencia de metales pesados como cianuro y mercurio en la cuenca del río Cali, en donde encontraron que no se presentaron niveles por encima de los límites, pero las personas que se abastecen directamente de la cuenca del río Cali, pueden resultar perjudicados (El País, 17 de marzo, 2015).

Debido a que la minería ilegal se seguía ejerciendo, las autoridades ambientales empezaron a proponer soluciones por la vía militar. Parques Nacionales, por medio de su actual directora, Julia Miranda, propuso instalar retenes de la Policía de Carabineros, con el fin de controlar el transporte de insumos para la minería ilegal, e impedir que salga el oro de la zona, pues aunque se estaban haciendo controles a la minería ilegal, todavía habían mineros explotando oro cerca de las cuencas hidrográficas. Esta institución alegó que detrás de estas actividades hay personas al margen de la ley (El País, 17 de marzo, 2015).

Además de las autoridades ambientales también hubo un actor privado quien intervino en la problemática. La Empresa de Energía del Pacífico, EPSA, es una empresa colombiana de servicios públicos, quien opera la central de generación eléctrica río Cali 1, la cual se encuentra ubicada sobre la Cordillera Occidental a 2 km al oeste de Cali, esta central trabaja en cascada y a filo de agua (Bolívar y Escobar, 2016). EPSA que dado sus intereses sobre el río Cali dio aportes voluntarios por 2000 millones de pesos por cinco años, junto con Parques Nacionales firmaron un convenio para preservar el PNN Farallones de Cali y las Hermosas (El País, 17 de Marzo, 2015).

Otra autoridad ambiental que propuso usar la vía militar fue el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente, DAGMA. Con el fin de eliminar la minería ilegal presente en los Farallones, propuso una alianza con la Policía y Parques Nacionales, se invirtieron 1000 millones de pesos, para instalar dos puestos fijos policiales y puestos de control móviles en la zona que pertenece a la ciudad Santiago de Cali, también se daría educación y sensibilización ambiental a los habitantes de la zona (El País, 27 de marzo, 2015).

El Consejo de Estado también buscó proteger los Farallones, por medio de un fallo de segunda instancia. El Consejo de Estado, es el Tribunal Supremo de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, quien tiene la función de resolver las controversias y conflictos originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones sujetos al derecho

administrativo en los que estén involucrados las entidades públicas o los particulares cuando ejerzan función administrativa (Consejo de Estado, 23 de mayo, 2017). En el mes de julio del 2015 El Consejo de Estado ordenó proteger las zonas de importancia ecológica del PNN Farallones, en este fallo se habló de un comité de verificación para que pudiera atestiguar el cumplimiento de la orden (El País, 8 de julio, 2015).

Entre el 25 y 30 de abril del 2015, PNN junto con la Policía Nacional y el Batallón de Alta Montaña No. 3 recorrieron la zona. Llegando a la conclusión de que la afectación por parte de la minería ilegal aumentó en un 152%, las hectáreas afectadas, los socavones encontrados, campamentos, zonas de trabajo minero, se habían incrementado con respecto al año 2014. Sin embargo, lo más sorprendente fue el cambio de cauce que sufrió la quebrada del Socorro, la cual es una micro cuenca que es afluente del río Cali, según Juan Iván Sánchez, se construyó un túnel artesanal de más de 30 metros de largo, el cual permitió que 800 litros por segundo de la quebrada el Socorro cayera a la cuenca del río Anchicaya (El País, 17 de marzo, 2015). Solo hasta el 13 de octubre del 2016 se logró recuperar la quebrada La Mina haciendo que corra en dirección a Cali, esto se logró gracias a una detonación realizada tras varios operativos por parte del Ejército, con ayuda de la Alcaldía y Emcali (El País, 15 de octubre, 2015).

Las alertas continuaron y esta vez el turno fue para Parques Nacionales quien también realizó un llamado de atención ante la contaminación. Según ellos el mayor potencial para afectar con mercurio y cianuro a un núcleo tan grande de población, lo tiene la minería ilegal presente en los Farallones de Cali. La ex directora de esta entidad, había realizado una declaración similar en el foro realizado por la Asamblea del Valle en noviembre del 2014. En los datos que se recogieron de los afluentes los niveles de mercurio y cianuro estaban por encima de lo permitido, voceros de Parques Nacionales se mostraron preocupados, pues la fauna, flora y personas que usan la fuente hídrica pueden verse afectados, y por si no fuera poco se encontró que 0,81 a 810 veces de lo permitido, eran los niveles de mercurio en sedimento presentado en el inicio de la cuenca media del río Cali (Personería de Santiago de Cali, 7 de septiembre, 2015).

Fueron argumentos fuertes a favor o en contra de las versiones sobre la contaminación del río Cali, los que llevaron a la disminución de la incertidumbre sobre este tema. Argumentos que pudieron ser estudios serios o recorridos a la zona que generaron presión mediática, la presión mediática logró que cada vez la ciudadanía le prestara más atención a la minería ilegal en los Farallones, y con su atención aumentó también su preocupación, lo que generó más estudios serios y más recorridos, hasta que se llegó a un momento en el cual se demostró la presencia de mercurio y cianuro en la cuenca del río Cali, y con esto se rompió parte de la incertidumbre existente, como cuando el ex secretario de Salud Harold Suárez socializó los resultados de las mediciones hechas al río Cali en donde se encontró presencia de cianuro y mercurio. Cabe resaltar que lo que llamó la atención de la ciudadanía y de algunas autoridades ambientales, no fue el daño a la fauna y flora, sino al posible deterioro de la calidad del agua potable, el medio ambiente no entró dentro de los intereses de la ciudadanía (Entrevistado G y H, 2016).

La CVC en octubre del 2015 en cumplimiento con su tarea, realizó monitoreos en los ríos de la ciudad. Los cuales arrojaron resultados en donde se encontraron cantidades de cianuro y mercurio, pero estos estaban por debajo de los límites de las autoridades sanitarias, esto fue

lo que dijo el director de la CVC Rubén Darío Materón. Además de esto, el secretario de Salud Municipal Harold Suárez dijo que en las 418 mediciones del índice de calidad de agua, hechas en el 2015 por parte de la secretaría de Salud, se mostró que el agua en la ciudad es apta para el consumo humano (El País, 16 de octubre, 2015).

Juan Carlos Solórzano coronel de la Policía de Carabineros, dijo que se estaba buscando realizar una nueva visita. Para determinar los recursos necesarios para instalar un puesto de control, el cual vigilaría la entrada de insumos para la minería ilegal y la salida del oro producto de la misma actividad ilícita. Luego en octubre del 2015, se buscó controlar el acceso de maquinaria a los Farallones por medio de la instalación de una base de control militar en la parte alta del páramo, sumándose a los dos puestos de control de carabineros ya existentes y ubicados en Venteaderos y la Leonera, según lo expresado por el brigadier General Wilson Chavez (El País, 16 de octubre, 2015).

Según David Navarrete, Secretario de la Comisión Técnica del Consejo Municipal de Desarrollo Rural, CMDR, se estaba buscando responder a la minería ilegal. Por medio de la creación de lazos entre la ciudadanía y las autoridades ambientales, como la CVC y UMATA, para esto se realizaron actividades de conservación que generaran ingresos a las personas de la ciudadanía (El País, 26 de noviembre, 2015).

Pero hay quienes no se encontraron conformes con estos anuncios. Pues el líder rural de la vereda Peñas Blancas, Édgar Sánchez, se mostró escéptico con los resultados de estos proyectos, él alegó que ya había ocurrido esto antes, se buscaba que la gente se vinculara legalmente a las autoridades ambientales y así obtener un sustento para sus familias, pero esto no había dado buenos resultados, por ende la gente recurrió a la minería ilegal y así buscaban sostener a sus familias. Édgar Sánchez espera que este plan de choque dé resultado. Por su parte, la entonces directora del DAGMA, María del Mar Mozo, le pidió a la ciudadanía creer en la institucionalidad (El País, 26 de noviembre, 2015).

Otro ente mostró los daños en el PNN Farallones de Cali, fue el diario El País. Quien en su portal web informó que 622 hectáreas de bosque habían sido deforestadas por la minería ilegal en los Farallones, esto generó aún más preocupación de la ya existente y llevó al actual Alcalde de Santiago de Cali Maurice Armitage a proponer que se realice una máxima restricción a la entrada de los Farallones. Esta propuesta fue compartida por Jaime Celis. Para el alcalde las consecuencias de la minería ilegal se estaban saliendo de control, esto fue lo que dijo al finalizar el consejo de seguridad sobre los daños del PNN Farallones de Cali (El País, 15 de abril, 2016).

La idea de una base militar permanente para controlar la minería ilegal prosiguió y para el año 2016 un proyecto relacionado con esto, se encontraba cursando trámites jurídicos. El cual buscaba detener la entrada de insumos y personal minero a la zona, según el actual director del DAGMA, Luis Alfonso Rodríguez, el proyecto consistió en construir puestos de control militar, en donde habrá presencia del Ejército, la Dirección de Carabineros, PNN y CVC (El País, 15 de abril, 2016).

A pesar de todos los intentos por parte de la ciudadanía para frenar la minería ilegal, está aún no se ha logrado controlar. Jaime Celis dijo que las personas siguen subiendo a la zona, pero en menor cuantía que antes, pero se debe realizar junto con las autoridades locales y nacionales, un cierre definitivo de la zona. Él estuvo de acuerdo con lo que dijo el actual

alcalde de Cali, Maurice Armitage, de prohibir totalmente la entrada al Parque Natural los Farallones de Cali (El País, 15 de abril, 2016).

En noviembre del 2015 distintas autoridades ambientales entre ellas, Umata, DAGMA, Parques Nacionales, firmaron un plan de choque. Esto se realizó para definir recursos con los cuales se pondría en marcha actividades productivas sostenibles de muy corto plazo en donde se desempeñaron 61 mineros cabeza de familia. Además de lo anterior, 4 ex trabajadores mineros habían sido contratados como operarios en Parques Nacionales en diciembre de 2015, otros 4 ex trabajadores mineros fueron contratados como operarios en Parques Nacionales de febrero a diciembre de 2016, y 5 ex trabajadores mineros fueron contratados por el DAGMA como guardabosques de febrero a diciembre del 2016. A lo anterior se suma el requerimiento de vincular ex trabajadores mineros, por parte del DAGMA en actividades de restauración de 2347 hectáreas con proceso avanzado durante todo el año 2016 (Parques Nacionales Naturales, 2016).

El Gobierno Nacional también buscó preservar los Farallones, delimitando 2070 hectáreas como zona protegida de páramo. Esto con el fin de detener la minería ilegal y proteger los recursos hídricos de la zona (El País, 4 de marzo, 2016). Esto en el marco de su política de proteger las fuentes hídricas y garantizar la generación hidroeléctrica, para ello se fijaron los límites de ocho páramos en todo el país, en total fueron 100 000 hectáreas de páramo las cuales fueron limitadas (Portafolio, 22 de marzo, 2016).

Estas intervenciones sociales contribuyen al ejercicio de autoridad. Como lo acontecido, en el que distintas autoridades ambientales buscaron brindar nuevas oportunidades de sustento a los mineros contratándolos como guardabosques o desarrollando proyectos productivos de corta duración, pero estos pronunciamientos no deben quedar en el aire, deben ser concretados, pues hay que tener en cuenta que la autoridad es ejercida también por medio de la credibilidad que una autoridad tenga frente a la ciudadanía, y si las autoridades ambientales velan por dar oportunidades a los mineros, no solo los mineros acataran la autoridad institucional sino también la ciudadanía que vive en la zona (Entrevistado F y I, 2016).

Las intervenciones sociales por parte la autoridad ambiental, son decisiones de carácter político que afectan las opciones económicas de los mineros, este es el campo de la NEP según Drazen (2001). Estas decisiones políticas hacen que la población minera observe la existencia de alternativas económicas frente a la minería ilegal, y teniendo más oportunidades es menos probable que incurran en dichas actividades. Dada la evolución de la problemática socio-ambiental, se observó que existieron otras situaciones, bienes o lugares que también cumplieron las características para ser considerados como bienes públicos. Por ejemplo, la cuenca del río Cali, ya que las personas entrevistadas manifestaron asimilar a este lugar como algo propio, algo en el cual, lo acontecido ahí fue competencia de todos, y si todos se propusieran intervenir la cuenca del río Cali, se podría hacer (Entrevistados D y H, 2016).

La ciudadanía consideró que la salud de la ciudadanía, el PNN Farallones de Cali y el accionar de las instituciones también cumplieron las anteriores tres características que las convierten en un bien público. También se hizo una distinción entre la salud de los habitantes de la zona urbana, lo cual acaparó la atención de los medios de comunicación, incluso de la

mayoría de la ciudadanía, pero la salud de los habitantes de la zona rural no despertó tanto interés, por lo que no entró en la categoría de bien público (Entrevistados D y H, 2016).

Para finalizar se observó que en la problemática socio-ambiental existieron varios tipos de perdedores. Los perdedores actuales que somos toda la ciudadanía al ver deteriorada la fauna y flora de un icono para la ciudad como lo son los Farallones. Otros perdedores son los mineros quienes ven deteriorarse su salud debido a la exposición al mercurio al usar esta sustancia para la extracción del oro, estos perdedores cuentan con la información necesaria para conocer la situación del problema ambiental pero no se han organizado o no han llegado a acuerdos con las autoridades ambientales para ejercer su poder y poner fin a la minería ilegal. Si la situación continúa las personas que nazcan en las próximas décadas, se podrían ver enfrentadas a problemas de desabastecimiento de agua, con lo cual en esta situación una parte de los perdedores no han nacido aún.

5. Conclusiones

A lo largo del corte cronológico en el cual se analizó la problemática ambiental, las distintas autoridades ambientales demostraron tener intereses disímiles. Pero con el tiempo dada la propia evolución de la problemática, estos intereses por distintas razones empezaron a converger en un interés común, el cual es la protección de la calidad del agua potable proveniente de la planta de tratamiento de San Antonio. La falta de un interés común se debió a varios factores, como que cada autoridad ambiental contara con intereses específicos que difieren entre ellos.

La creación del interés común fue una construcción social, entre todas las instituciones y la comunidad, esta construcción se realizó a lo largo del tiempo y se logró gracias al conflicto entre la comunidad y algunas autoridades ambientales como la CVC. Al tener un interés común, las autoridades ambientales y la comunidad pueden tomar elecciones comunes dentro del ámbito de una problemática ambiental que hace parte de la esfera pública.

La manera en que las autoridades ambientales enfrentaron la problemática ambiental, se dio en dos etapas. La primera etapa inició con ciertas advertencias sobre la minería ilegal que ocurre en los Farallones, lo que dio lugar a una incertidumbre, sobre si existía contaminación en las aguas del río Cali, lo que conllevó a otra incertidumbre en cuanto a la calidad del agua potable proveniente de este río, y como consecuencia se generaron dudas sobre la seguridad de la salud pública.

Algunas autoridades ambientales alegaron de que si existía la contaminación en las aguas del río Cali y otras de que no existió, y dado que las autoridades ambientales cuentan con el mismo prestigio ante los ojos de la ciudadanía, no se pudo escoger un punto de partida para enfrentar la situación, esto conllevó a la realización de ciertos estudios e intervenciones, y cuando la personería de Cali hizo un recorrido en octubre del 2014 y comprobó que la minería ilegal usa sustancias como el mercurio y el cianuro, se ocasionó un punto de quiebre, con lo cual se llegó a la segunda etapa.

En la segunda etapa del conflicto ya no existía una incertidumbre sobre si las aguas del río Cali se encontraban contaminadas, sino que se pasó a admitir dicha contaminación. Esto dio

inicio a una nueva etapa de control por parte de las autoridades ambientales, en donde, la posibilidad de contaminación en el agua potable aumentó considerablemente y por ende, aumentó la incertidumbre sobre un daño a la salud pública, esto dio inicio a una serie de intervenciones que condujeron a que el agua potable no se encontraba contaminada, pero si la situación persistía, se podría llegar a una afectación en el futuro. Pero lo que no se supo fue en qué momento se daría esta afectación, creándose otra incertidumbre, lo que conllevó a fortalecer la coordinación de las autoridades ambientales y de las intervenciones que ya se venían realizando. Se empezó a mirar el lado social de la problemática y se buscó la manera de darles una oportunidad a los mineros para que dejaran de lado las actividades de minería ilegal, y esta fue la última etapa de la problemática que se pudo analizar debido al corte cronológico. Se concluyó que el manejo dado por las autoridades ambientales a este tipo de problemas continuará evolucionando en el futuro, dependiendo del éxito de las intervenciones y de la presión mediática e institucional, y también de sanciones proferidas por ciertos entes gubernamentales a otros.

Las autoridades ambientales pueden ser vistas como gobernantes o como actores económicos, la disparidad de intereses de éstos, frente a los intereses de la ciudadanía ha ido concluyendo. Esto ocasionó que se acordaran un conjunto de acciones con las cuales intervenir la problemática, pero los mineros que también son actores económicos siguen presentando intereses diferentes, pues ellos necesitan de la minería ilegal para sobrevivir. Si las autoridades ambientales y la ciudadanía no encuentran una forma de que los mineros puedan obtener su sustento de otra manera, y así cambien sus intereses, es muy probable que este tipo de actividades ilícitas continúe persistiendo, con lo cual la incertidumbre sobre un daño a la salud pública en un futuro, no desaparecería en el corto plazo.

El poder de agenda, fue usado por las autoridades ambientales de distintas maneras para diferentes propósitos. Por ejemplo, para contribuir a la resolución del problema ambiental, como cuando la Personería de Cali en un recorrido realizado en el PNN Farallones de Cali demostró la existencia de contaminación en el río Cali, también se puede usar el poder de agenda para obstruir en la resolución del problema como cuando funcionarios de la CVC desvirtuaron la alarma dada por Ana María Silva Contralora Delegada de Minas y Energía.

Pero no solo las autoridades ambientales influyeron en la problemática, los medios de comunicación también. Pues éstos tuvieron cierta influencia sobre el manejo dado por la ciudadanía hacia la problemática, ya que afectaron de manera directa e indirecta las políticas usadas, directamente informando sobre una mala intervención en particular, con lo cual se afectaron las futuras políticas a implementarse, indirectamente cuando alarmaron a la ciudadanía por medio de noticias e informes sobre la minería ilegal, ocasionando que la ciudadanía presionara a las autoridades ambientales a desarrollar políticas más adecuadas.

6. Bibliografía

Alcaldía Santiago de Cali. (2012). Administración Municipal dio inicio al cierre técnico de las minas de El Socorro. www.cali.gov.co. Recuperado 19 Mayo 2017, de [http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.cali.gov.co/publicaciones/45057/administracin municipal dio inicio al cierre tcnico de las minas de el socorro/](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.cali.gov.co/publicaciones/45057/administracin+municipal+dio+inicio+al+cierre+tecnico+de+las+minas+de+el+socorro/)

Alcaldía de Santiago de Cali. (2012). Alcaldía anunció el cierre total de las minas del Socorro en el parque Los Farallones de Cali. www.cali.gov.co. Recuperado 19 Mayo 2017, de [http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.cali.gov.co/publicaciones/alcalda anunci el cierre total de las minas del socorro en el parque los farallones de cali pub](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.cali.gov.co/publicaciones/alcalda+anunci+el+cierre+total+de+las+minas+del+socorro+en+el+parque+los+farallones+de+cali+pub)

Álvarez, J., y Jurgenson, G. (2003). *¿Cómo hacer investigación cualitativa? Fundamentos y Metodología*. Paidós Educador

Arendt, H. (1958). *La condición Humana*, capítulo 2. Paidós Ibérica, 368pp.

Besley, T. (2007). "New Political Economy". *The Economic Journal*, 117, 2007, pp. F570-F587.

Bolívar, J., & Escobar, G. (2016). *Historia Empresarial Empresa de Energía del Pacífico S.A EPSA ESP PERÍODO 1995 - 2014* (Tesis de maestría). Universidad del Valle, Santiago de Cali, Colombia.

Boyce, J.K. *The Political Economy of the Environment*, Northampton, Edward Elgar, 2002.

BUDS, Jesica. Relaciones Sociales de Poder y la Producción de Paisajes Hídricos. En: RUTGERD, Boelens. LEONTIEN, Cremers. MARGREET, zwarteven. *Justicia hídrica*

acumulación, conflictos y acción social. Cusco: Centro Bartolomé de las Casas, Instituto de Estudios Peruanos, Fondo Editorial PUCP 2011. Pp.59-69.

Caporaso, J.A.; Levine, D.P. (1992). *Theories of Political Economy*, Nueva York, Cambridge University Press.

Castaño Uribe, C. (1998). *El sistema de parques nacionales naturales de Colombia* (1ra ed., pp.225-228). [Colombia]: Ministerio del Medio Ambiente.

Consejo de Estado. (2017). Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y Cuerpo Supremo Consultivo del Gobierno. [En línea] Disponible en: <http://www.consejodeestado.gov.co/nuestraentidad.php> [Accedido 15 Mayo 2017].

Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. (2011). Memorando 0650-15945-2011 Recuperado de http://www.elpais.com.co/elpais/archivos/RESULTADOS_LABORATORIO_CVC.JPG

Drazen, Allan. What is Political Economy? In: DRAZEN, Allan. *Political Economy in Macroeconomics*. New Jersey: Princeton University Press, 2001. 792 p.

El País. (2 de noviembre de 2012). Autoridades alertan por reactivación de minería ilegal en Farallones de Cali. El País. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/california/autoridades-alertan-por-reactivacion-de-mineria-ilegal-en-farallones-de.html>

El País. (4 de marzo de 2016). Río Cali vuelve a mancharse de negro por minería ilegal y aguas residuales: Dagma. El País. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/elpais/california/noticias/rio-cali-vuelve-mancharse-negro-por-mineria-y-descargas-residuales-dagma>

El País. (5 de mayo de 2011) Minería ilegal en los Farallones de Cali estaría a cargo de transnacionales. El País. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/california/mineria-ilegal-en-los-farallones-de-estaria-a-cargo-de-transnacionales.html>

El País. (8 de julio de 2015). Fallo ordena proteger áreas de Parque Nacional Farallones de Cali. El País. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/elpais/california/noticias/fallo-ordena-proteger-areas-parque-nacional-farallones-cali>

El País. (11 de septiembre de 2013). Piden evaluar si hay altos niveles de mercurio en la bocatoma del río Cali. El País. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/elpais/california/noticias/piden-evaluar-si-hay-altos-niveles-mercurio-bocatoma-rio-cali>

El País. (12 de mayo de 2011). Comienzan a dismantelar minas ilegales en los Farallones de Cali. El País. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/elpais/california/comienzan-desmantelar-minas-ilegales-en-farallones-cali>

El País. (14 de mayo de 2011) La minería ilegal está disparada en los Farallones de Cali, vea los últimos hallazgos. El País. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/cali/la-mineria-ilegal-esta-disparada-en-los-farallones-de-vea-los-ultimos-hallazgos.html>

El País. (15 de abril de 2016). Estudian restringir el acceso al Parque Nacional Natural Farallones. El País. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/farallones-deberian-acceder-ni-turistas-dice-alcalde-armitage>

El País. (16 de octubre de 2015). Instalarán bases militares en Farallones de Cali para frenar la minería ilegal. El País. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/instalara-bases-militares-farallones-para-frenar-mineria-ilegal>

El País. (17 de marzo de 2015) Ya hay 5.000 hectáreas de Los Farallones de Cali deterioradas por invasiones y minería ilegal. El País. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/cali/ya-hay-5-000-hectareas-de-los-farallones-de-deterioradas-por-invasiones-y-mineria-ilegal.html>

El País. (17 de mayo de 2011). Tribunal del Valle ordena el cierre de las minas de los Farallones de Cali. El País. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/elpais/cali/ordenan-alcalde-cerrar-minas-farallones-cali>

El País. (19 de abril de 2013). Lanza nueva voz de alerta por posible presencia de cianuro en aguas del río Cali. El País. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/alertan-por-posible-presencia-cianuro-aguas-río-cali-por-mineria-ilegal>

El País. (19 de noviembre de 2014). Nueva alerta por contaminación con químicos en ríos de Farallones de Cali. El País. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/nueva-alerta-por-contaminacion-con-quimicos-rios-farallones-cali>

El País. (26 de noviembre de 2015). Plan de choque para contrarrestar minería ilegal en el Parque Farallones de Cali. El País. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/acuerdan-plan-choque-para-contrarrestar-mineria-ilegal-parque-farallones-cali>

Entrevistados A, B, C, D, E, F, G, H, I. (28 Septiembre del 2016 - 13 Enero del 2017). Contaminación Río Cali. Varios.

Fontana, A., Frey, J. (2005). The Interview, from neutral stance to political involvement. En N. K. Denzin & y S., Lincoln (Comp). *The Sage Handbook of Qualitative Research* (695-727). London, UK: Sage.

Funtowicz, Silvio., y Jerome, Ravetz (1993) Epistemología Política. Ciencia con la Gente. Buenos Aires, CEAL. Serie Fundamentos de las Ciencias Humanas No 107.

Garcés Guerrero, D., & de la Zerda Lerner, S. (1994). *Gran libro de los parques nacionales de Colombia* (1st ed., pp. 140-141). [Santafé de Bogotá, Colombia]: Intermedio Editores.

Marcellesi, Florent. (2012). ¿Qué es la ecología política? Una vía para la esperanza en el siglo XXI, Organización Bakeaz, Cuides OCTUBRE 2012- No 9.

Marchiori, E. (2009). *Los desafíos de la incertidumbre*. Buenos Aires: Olmo Ediciones. Pag 25-37

Natenzon, Claudia. (1995). Catástrofes naturales, riesgo e incertidumbre. Buenos Aires, FLACSO. Serie e Informes de Investigación No 197.

OMS (Organización Mundial de la Salud). (Marzo 2017). El mercurio y la salud. Centro de Prensa Nota Descriptiva. Recuperado de <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs361/es/> PNN de Colombia (2017). Parque Nacional Natural Farallones de Cali | Parques Nacionales Naturales de Colombia. [En línea] Disponible en: <http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/parques-nacionales/parque-nacional-natural-farallones-de-cali/> [Accedido 15 Mayo 2017].

PNN de Colombia. (2014). Explotación ilícita de yacimientos auríferos en el PNN Farallones, especialmente en los corregimientos de Pichindé, Felidia y la Leonera. Recuperado de <http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/>.

PNN de Colombia. (2016). La minería ilegal de Oro en el PNN Farallones de Cali y su afectación sobre el Recurso hídrico y los Ecosistemas Presentes en la parte Alta de la Cuenca Del Río Cali. [Presentación en PowerPoint]. Recuperado de <http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/>.

Personería Municipal de Santiago de Cali. (20 de abril de 2013). Personería de Cali alertó por posible contaminación con mercurio en la parte alta de la cuenca del río Cali y expuso la situación de las antenas en foro realizado en la U. Icesi. [www.personeriacali.gov.co](http://www.personeriacali.gov.co/actualidad/noticias/580-personeria-de-cali-alerto-por-posible-contaminacion-con-mercurio-en-la-parte-alta-de-la-cuenca-del-rio-cali-y-expuso-la-situacion-de-las-antenas-en-foro-realizado-en-la-u-icesi#.VwK0X_I97IU). Recuperado de http://www.personeriacali.gov.co/actualidad/noticias/580-personeria-de-cali-alerto-por-posible-contaminacion-con-mercurio-en-la-parte-alta-de-la-cuenca-del-rio-cali-y-expuso-la-situacion-de-las-antenas-en-foro-realizado-en-la-u-icesi#.VwK0X_I97IU

Personería Municipal de Santiago de Cali. (7 de Septiembre de 2015). Minas envenenan la cuenca del río Cali. www.personeriacali.gov.co. Recuperado de <http://www.personeriacali.gov.co/noticias/minas-envenenan-la-cuenca-del-r%C3%ADo-cali#.VwFozvI97IU>

Personería Municipal Santiago de Cali. (2015). Informe Situacional PNN Farallones de Cali. Recuperado de <http://www.personeriacali.gov.co>

Portafolio. (22 de marzo de 2016). Gobierno delimitó ocho páramos para proteger fuentes hídricas. Estos abarcan 100 mil hectáreas, comprenden 8

departamentos, y proveen de agua a más de tres millones de personas. En total son 35 a preservar. Portafolio. Recuperado de <http://www.portafolio.co/economia/gobierno/ocho-paramos-gobierno-delimito-proteger-fuentes-agua-492999>

RCN Radio. (2016). RCN Radio | Banco Mundial advierte que Colombia es el segundo país más desigual de A. Latina. [En línea] Disponible en: <http://www.rcnradio.com/internacional/banco-mundial-advierde-colombia-segundo-pais-mas-desigual-latina/> [Accedido 15 Mayo 2017].

Redacción Cali. (1 de octubre de 2013). No hay riesgo por mercurio en el río Cali: CVC. El Tiempo Recuperado de <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13094913>

Redacción de El País. (3 de mayo de 2011). Emcali asegura que el agua potable de Cali no está contaminada. El País. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/elpais/cali/agua-potable-cali-esta-contaminada-emcali>

Redacción de El País. (10 de abril de 2015). Proponen base permanente de la Policía para controlar minería ilegal en Los Farallones. El País Recuperado de <http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/proponen-base-permanente-policia-para-controlar-mineria-ilegal-farallones>

Redacción de El País. (15 de octubre de 2015). Quebrada La Mina, en los Farallones, fue recuperada para Cali. El País. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/cali/quebrada-la-mina-en-los-farallones-fue-recuperada-para.html>

Redacción de El País. (16 de diciembre de 2011). Ordenan dos días de arresto para Alcalde de Cali por desacato a tutela. El País. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/ordenan-dos-dias-arresto-para-alcalde-cali-por-desacato-tutela>

Redacción de El País. (17 de mayo de 2015). Ya hay 5.000 hectáreas de Los Farallones de Cali deterioradas por invasiones y minería ilegal. El País. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/ya-hay-5000-hectareas-farallones-cali-deterioradas-por-invasiones-y-mineria-ilegal>

Redacción de El País. (27 de marzo de 2015). Preocupa calidad del agua de dos quebradas en los Farallones de Cali. El País. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/preocupa-calidad-agua-dos-quebradas-farallones>

Robbins, P. (2004). *Political Ecology. A critical introduction*. Blackwell: Malden.

Robbins, P. (2012). *Political Ecology. A Critical Introduction*, Malden, Wiley-Blackwell.

Rodríguez, M. (2010). *Introducción al análisis cualitativo para las ciencias sociales*. Escuela de Psicología U. del Mar, 1(1) pp. 1-14.

Ruíz, J.I. (2012). *Metodología de la Investigación Cualitativa*. Bilbao, España: Universidad de Deusto. Pp. 11-47.

Schettini, P. Cortazzo, I. (2015). *Análisis de datos cualitativos en la investigación social: Procedimientos y Herramientas para la Interpretación*. Buenos Aires, Argentina: Editorial de la Universidad de La Plata.

Sesana, L. y Hurtado García, A. (2007). *Colombia Parques Naturales*. (1ra ed., pp.163-167) [California, Estados Unidos]: Villegas Editores.

Unidad Investigativa. (2 de mayo de 2011). Minería ilegal pone en riesgo acueducto de San Antonio. El País. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/elpais/cali/mineria-ilegal-pone-en-riesgo-acueducto-san-antonio>

Unidad Investigativa. (19 de diciembre de 2011). Minería en los cerros pone en jaque al Alcalde de Cali. El País. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/mineria-en-cerros-pone-en-jaque-alcalde-cali>

Vargas, I. (2012). La Entrevista en la investigación cualitativa: Nuevas tendencias y retos. CAES, 3(1), pp.119-139.

Villamil Muñoz, Jessica. (4 de Marzo de 2012). ¿Por qué no se ha logrado frenar la minería ilegal en los Farallones de Cali? El País. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/mineria-ilegal-sigue-explotando-parque-nacional-natural-farallones-en-cali>

Wengraf, T. (2012). *Qualitive Research Interviewing*. London: SAGE.

Apéndice

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Las preguntas fueron las siguientes:

1. ¿Conoce en detalle la situación de lo que ocurre en los Farallones?
2. ¿Cómo se manifiesta la ciudadanía que habita en la zona, ante tal situación, o qué denuncias tiene de ellas?
3. ¿Qué tan peligroso es para usted la posible contaminación con cianuro y mercurio en el río Cali?
4. ¿Si existiese la contaminación, EMCALI está capacitada para descontaminar y proveer el servicio de agua potable?
5. ¿Qué ocurriría si el agua que estamos tomando está contaminada?
6. ¿Puedes detallar el accionar de la alcaldía de Jorge Iván Ospina?
7. ¿Usted tiene conocimiento de las declaraciones hechas por la delegada de minas y energía Ana María Silva, de que los niveles de mercurio del río Cali estarían 1355% por encima de la norma, dado estudios entregados por las autoridades ambientales del Valle?
8. ¿Qué tan periódicos son los monitoreos?
9. ¿Las mediciones siempre las hace alguna institución del Estado o EMCALI, será que la puede hacer otra entidad, un tercero, una entidad extranjera?
10. ¿Qué le sucedería a EMCALI si el agua estuviera contaminada?

11. ¿Qué tan consciente cree usted que es la ciudadanía frente a la problemática, y a qué cree que se deba esto?
12. ¿Quién controla la zona del PNN Farallones?
13. ¿Desde hace tiempo se hablan de puestos policivos, cuando se van a hacer, o ya se han hecho?
14. ¿Son necesarios los lazos de la ciudadanía y el Estado para frenar la minería, y como se crearían?
15. ¿Cree en la capacidad de las autoridades ambientales para enfrentar este tipo de problemas?
16. ¿Es suficiente las sanciones disciplinarias para los alcaldes en caso de falta de accionar?
17. ¿Se le ha hecho o se le hará un seguimiento a la salud de las personas que se abastecen directamente del río Cali?

Las dos preguntas adicionales realizadas a la señorita Lilia Estela Hincapié fueron:

1. ¿Qué fue lo que la llevó a interponer la tutela?
2. ¿Por qué luego del operativo realizado el día miércoles 3 de mayo del 2011, llevado a cabo por el ex alcalde Jorge Iván Ospina, usted siguió con las denuncias?